

La clase media no pide discursos: pide respuestas



César Cifuentes

Expresidente regional PRI

Hay una realidad que incomoda, pero que es necesario decir con claridad: la clase media en Chile está cansada. No enojada, no movilizada, no radicalizada. Cansada.

Y ese cansancio no distingue gobiernos. Viene acumulándose hace años, producto de decisiones que, muchas veces con buenas intenciones, han terminado golpeando siempre al mismo grupo: quienes trabajan, cumplen, pero no alcanzan a sentirse protegidos.

Hoy, ser clase media en Chile es vivir en una permanente contradicción. No se es lo suficientemente vulnerable para recibir ayuda del Estado, pero tampoco lo suficientemente acomodado para resistir sin problemas los constantes aumentos en el costo de la vida.

Ahí está la tensión.

En los últimos años, el costo de la vida ha aumentado de forma sostenida. La inflación ha impactado directamente en alimentos, transporte y servicios básicos. A eso se suma el alza en las cuentas de la luz, que ya ha golpeado con fuerza los presupuestos familiares.

Pero hay un factor que hoy duele especialmente: el combustible.

Más allá de las explicaciones técnicas, en las últimas semanas los precios han vuelto a subir de una forma que, para muchas familias, no solo se sintió como un golpe, sino como un límite. Porque ya no se trata simplemente de que llenar el estanque sea más caro. En muchos casos, directamente dejó de ser sostenible.

Hoy hay familias que están ajustando su vida diaria en función del combustible. Reduciendo traslados, dejando de usar el auto todos los días, reorganizando horarios, incluso priorizando entre movilizarse o cubrir otras necesidades básicas. Ir a trabajar, llevar a los hijos al colegio o cumplir con rutinas normales pasó a ser una decisión que tiene costo.

Y eso se agrava aún más en meses como marzo, donde el pago de permisos de circulación, junto con otros gastos estacionales, termina presionando todavía más el presupuesto. No es casual que muchas personas estén postergando obligaciones o dejando de lado gastos esenciales para poder seguir moviéndose.

A esto se suma una sensación que empieza a instalarse con fuerza en la calle. En medio de este escenario, donde muchas familias han tenido que postergar gastos como el permiso de circulación o ajustar al máximo su presupuesto, lo que se percibe es un aumento en los controles de tránsito.

Y ahí aparece una tensión incómoda. Porque mientras la ciudadanía espera ver una presencia más fuerte en el combate a la delincuencia, lo que muchas veces se encuentra es fiscalización enfocada en lo administrativo.

No se trata de cuestionar la labor de Carabineros de Chile, que cumple funciones necesarias para el orden público. Se trata de cómo se percibe la prioridad. Y hoy, para una parte importante de la clase media, esa prioridad parece desalineada con sus urgencias.

La sensación es clara: en un contexto donde llegar a fin de mes ya es difícil, donde movilizarse tiene un costo cada vez más alto, el Estado aparece primero para

exigir, antes que para aliviar. Y eso no solo genera molestia, genera distancia.

Y ese es el punto que muchas veces no se entiende. No se trata solo de cuánto sube en términos técnicos, sino de cómo se vive en la práctica. Y en Chile, hoy, se vive como una presión constante que no da tregua.

El problema no es solo el precio, es la falta de una estrategia clara para amortiguar su impacto.

Porque cuando el combustible sube, no solo afecta al que maneja. Aumenta el costo del transporte, de los alimentos, de los servicios. Es una cadena completa que termina golpeando siempre al mismo: la clase media.

Y frente a eso, lo que se percibe no es solo un problema económico, sino algo más profundo: una falta de respuesta clara.

Porque no basta con explicar. No basta con justificar.

La clase media no necesita discursos técnicos, necesita soluciones concretas.

Y aquí es donde es importante ser justos. Este no es un problema exclusivo del gobierno actual. Es una deuda acumulada de la política chilena en su conjunto. Durante años se construyeron políticas públicas que segmentaron a la población, dejando a la clase media en una especie de zona gris: demasiado "rica" para recibir beneficios, demasiado "pobre" para vivir tranquila.

Sin embargo, reconocer que el problema es estructural no puede transformarse en una excusa para no actuar.

Hoy el desafío es distinto. Es gobernar entendiendo que la estabilidad del país depende, en gran medida, de cómo se sostiene su clase media.

Eso implica revisar con mayor profundidad los mecanismos de estabilización, evaluar herramientas que permitan amortiguar alzas bruscas y, sobre todo, anticiparse a los impactos en lugar de reaccionar tarde.

Ordenar el gasto público, priorizar medidas que alivien el costo de vida y recuperar la seguridad—no solo en las calles, sino también en la vida cotidiana—son tareas urgentes. Porque la inseguridad no es solo delincuencia; también es no saber si el sueldo alcanzará a fin de mes.

Desde una mirada responsable, quienes creemos en el mérito, en el esfuerzo y en un Estado que funcione bien, también tenemos el deber de exigir resultados. Apoyar un gobierno no significa dejar de mirar críticamente su gestión. Al contrario, significa empujar para que haga mejor las cosas.

Y hoy esa exigencia es clara: no basta con administrar el problema, hay que enfrentarlo.

Porque cuando la clase media empieza a sentir que cumplir no tiene recompensa, el daño no es solo económico. Es cultural. Se rompe la confianza, se debilita el sentido de pertenencia y se instala la idea de que el esfuerzo deja de tener sentido.

Chile no necesita más explicaciones.

Necesita certezas.

Porque al final, el verdadero termómetro de un país no está en sus discursos, sino en cómo vive su clase media.

Y hoy, esa realidad se mide en algo mucho más simple: llegar a fin de mes... después de pagar la luz y poder moverse.